

Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

Al escrito folio N°6: téngase presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos cuarto y quinto, que se suprimen.

Y se tiene en su lugar y además presente:

1.- Que según consta de los antecedentes incorporados al recurso, en la causa rol N° 28342-2 del 12° Juzgado del Crimen de Santiago, seguida por el delito de robo con fuerza, el amparado permaneció en prisión preventiva desde el 4 de diciembre de 1992 al 31 de diciembre de 1992; luego, en la causa rol N° 3334-2001, del 16° Juzgado del Crimen de Santiago, seguida por infracción a la Ley 19.366, permaneció bajo el citado régimen cautelar entre el 9 de octubre de 2001 y el 04 de octubre de 2002; y, finalmente, en la causa rol N° 6240-5, del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, seguida por el delito de robo con intimidación, estuvo en prisión preventiva desde el 3 de agosto de 1998 al 17 de marzo de 1999, habiéndose declarado en todas ellas el sobreseimiento definitivo respecto del recurrente.

2.- Que el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por resolución de 25 de abril de 2025, estimó improcedente abonar el tiempo de privación de libertad sufrido con motivo de las causas en las que fue dictado el sobreseimiento definitivo al castigo impuesto en causa RIT 4927-2014 de ese tribunal, en la que fue condenado como autor de un delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil en concurso con el delito de estafa, a la pena efectiva de doscientos días de presidio menor en su grado mínimo, por resultar, en su concepto, improcedente.

3.- Que el objetivo global de la Reforma Procesal Penal comprende una maximización de las garantías en materia de derechos fundamentales frente al *ius puniendi* estatal, con especial énfasis en diversos principios, como el *in dubio pro reo*. En tal contexto, y como una primera aproximación, aparece de toda justicia



considerar a favor del sentenciado el tiempo anterior de privación de libertad — como lo es, sin duda, el que estuvo sometido a la medida cautelar de prisión preventiva— para abonarlo al cumplimiento de la pena actual.

4.- Que el análisis de la normativa aplicable al caso obliga a consignar, en primer lugar, que la resolución del tribunal de cumplimiento, que lo es el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, se basa fundamentalmente en que no puede aceptarse el abono solicitado por cuanto no se satisface las exigencias contenidas en los artículos 348 del Código Procesal Penal y 164 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto las causas no estuvieron en condiciones de tramitarse conjuntamente.

5.- Que, cabe hacer referencia a los artículos 26 del Código Penal, mismo 348 del Código Procesal Penal y 164 del Código Orgánico de Tribunales, los cuales inciden en el problema planteado, cuál es, si cabe dar lugar al abono pedido tratándose de causas diferentes que no pudieron tramitarse acumuladas, lo que ha sido denominado abono heterogéneo.

Así el artículo 26 del Código Penal dispone: *“La duración de las penas temporales empezará a contarse desde el día de la aprehensión del imputado.”* La norma del artículo 348 del Código Procesal Penal establece: *“La sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará ésta a contarse y fijará el tiempo de detención, prisión preventiva y privación de libertad impuesta en conformidad a la letra a) del artículo 155 que deberá servir de abono para su cumplimiento. Para estos efectos, se abonará a la pena impuesta un día por cada día completo, o fracción igual o superior a doce horas, de dichas medidas cautelares que hubiere cumplido el condenado”.* Y el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, en lo que interesa, dispone: *“Cuando se dictaren distintas sentencias condenatorias en contra de un mismo imputado, los tribunales que dictaren los fallos posteriores al primero no podrán considerar circunstancias modificatorias que de haberse acumulado los procesos no se hubieren podido tomar en cuenta. Deberán, asimismo, regular la pena de*



modo tal que el conjunto de penas no puede exceder de aquella que hubiere correspondido de haberse juzgado conjuntamente los delitos. En los casos del inciso anterior, el tribunal que dictare el fallo posterior deberá modificarlo, de oficio o a petición del afectado, al objeto de adecuarlo a lo allí expuesto.”

De la sola lectura de las normas transcritas aparece que, si bien ellas no autorizan expresamente los abonos de tiempos de privación de libertad anteriores, tampoco los prohíben.

6.- Que, en las condiciones dichas, es indudable que la legislación vigente deja sin resolver expresamente el problema del abono de los tiempos que reúnan las características del solicitado en estos autos; esto es, de un período de prisión preventiva correspondiente a procesos anteriores, en los que fue dictado sobreseimiento definitivo, a la nueva causa, en que cumple actualmente una condena privativa de libertad. Por ello, debe el juzgador cumplir su obligación ineludible de decidir la cuestión planteada recurriendo a los principios generales del derecho y al sentido general de la legislación nacional e internacional.

7.- Que entendiendo que el pronunciamiento que acá se emite afecta sólo al presente caso, cuyo contenido se trata de solucionar, estima esta Corte que corresponde acoger lo solicitado por el recurrente, conforme, entre otros, a los siguientes razonamientos que se orientan en esa dirección.

a) La normativa procesal penal —tanto el Código Procesal Penal como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente—, acorde con la constitucional y de derecho internacional, prefiere claramente medidas cautelares personales menos gravosas que la privación de libertad transitoria —prisión preventiva o internación provisoria—, lo cual supone reconocer el valor superior de la libertad y el carácter ofensivo para el derecho a ella que importa su privación.

b) Si la privación temporal de la libertad resulta injustificada, como en las causas en que el afectado estuvo en prisión preventiva y luego fue dictado sobreseimiento definitivo, no puede exigírsele que simplemente se conforme con

esa injusticia que derivó de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado; en especial si después de ello, debe cumplir una condena privativa de libertad.

c) No parece suficiente ni lógico que, para reparar esa injusticia, el afectado sólo tenga como vía de solución intentar obtener —a su costa— la declaración señalada en el artículo 19 N°7, letra i) de la carta política, y emprender posteriormente la tramitación de un juicio sumario que pueda entregarle una indemnización, luego de bastante tiempo.

d) Las normas penales deben ser interpretadas restrictivamente sólo en el caso de afectar derechos fundamentales de los imputados, pero no cuando ellas dicen relación con los efectos libertarios de cualquier apremio o restricción a su libertad, como ocurre con el abono pedido por el amparado, conforme a las características ya descritas; lo que está en concordancia con la garantía que reconoce el artículo 19, N°7 de la Constitución y con la norma del artículo 5° del Código Procesal Penal que dispone: *“Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes. Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.”*

8.- Qué, en consecuencia, al decidirse por el juez recurrido que en la especie no procede la imputación de abonos en causa diversa, por no concurrir el requisito de tramitación conjunta contemplado en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 348 del Código Procesal Penal, ha incurrido en una ilegalidad, puesto que incorporó al precepto requisitos que no contempla y que no es posible aceptar, sin vulnerar el principio rector de interpretación restrictiva de la ley procesal penal, en cuanto afecta derechos constitucionales del penado, con incidencia tanto en lo procesal como en la interpretación de la ley;



entre cuyos criterios está el que afirma que en caso de duda se resuelve a favor del acusado, o en caso de duda se resuelve en el sentido favorable al imputado (Sergio Politoff, Derecho Penal, Tomo I, pág. 133).

Por estar consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de seis de mayo de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el Ingreso Corte N° 1679-2025, y en su lugar **se acoge** el recurso de amparo interpuesto a favor de Carlos Alejandro Iván Castro Caro, debiendo el señor juez *a quo* arbitrar medidas a fin de reconocer en su favor el tiempo que estuvo privado de libertad en las causas rol N° 28342-2 del 12° Juzgado del Crimen de Santiago, rol N° 3334-2001, del 16° Juzgado del Crimen de Santiago y rol N° 6240-5, del 32° Juzgado del Crimen de Santiago a la causa RIT 4927-2014 del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

Acordado con el voto en contra de la Ministra señora Letelier, quien fue de la opinión de confirmar la resolución apelada por sus propios fundamentos.

Regístrese, comuníquese por la vía más expedita y devuélvase.

Rol N° 16.407-2025.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., Maria Gajardo H. y Abogado Integrante Raul Fuentes M. Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintidós de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

